

Sr. Jin Lique

Presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)

Extendemos un cordial saludo por parte de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina que suscriben esta comunicación. Nos dirigimos respetuosamente a usted en su calidad de Presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para hacerle llegar la siguiente carta abierta, alineada al compromiso del banco de promover el desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo en nuestra región.

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar preocupaciones y propuestas al Banco respecto a cuatro temas clave: 1) contribuciones a una visión estratégica del papel del BAII en América Latina, 2) infraestructura para el transporte, 3) transición energética justa, y 4) fortalecimiento de la transparencia y participación de la sociedad civil.

1. Una visión estratégica para el papel del BAII en América Latina

El BAII ha declarado que no tiene intención de adoptar estrategias específicas para los países latinoamericanos y la región en su conjunto; sino que estará sujeto a solicitudes específicas de los gobiernos nacionales y subnacionales y asegurará que los proyectos se adhieran a su marco ambiental y social, y a otras políticas generales del Banco.

Creemos que el Banco necesita adoptar un enfoque más ambicioso y holístico hacia el diseño e implementación de estrategias de financiamiento nacionales y regionales, apoyando a los países latinoamericanos a abordar las crisis interrelacionadas de desigualdades socioeconómicas, cambio climático y pérdida de biodiversidad dentro de un marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El presidente chino, Xi Jinping, ha expresado una visión estratégica según la cual los países colaboran para construir una “civilización ecológica”. De igual manera, el Papa Francisco habló con elocuencia sobre la necesidad de una “ecología integral” donde las sociedades y los sistemas económicos se centren en el cuidado del planeta, nuestra “casa común”, y la inclusión social, abarcando las necesidades de los grupos pobres y marginados de la sociedad.¹ Ambos pidieron especial atención a la creciente emergencia del cambio climático.

¹ Carta encíclica LAUDATO SI, del Santo Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, 2015.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Creemos que las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr estas visiones estratégicas, pero esto requiere una nueva reflexión sobre el papel de la infraestructura en la promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, destacamos los siguientes puntos clave:

- Un nuevo paradigma para la inversión en infraestructura debe comenzar priorizando la protección de la naturaleza y garantizando la integridad de los ecosistemas esenciales para el mantenimiento de la vida en el planeta. Esto implica superar la ilusión de que los modelos de crecimiento económico pueden basarse en la explotación ilimitada de la naturaleza, donde el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ecológica pueden compensarse a través de la innovación tecnológica.
- Las inversiones en infraestructura deben vincularse al análisis de las bases materiales, energéticas y bióticas para la formación de riqueza dentro de los modelos de desarrollo económico, y su impacto en el bienestar humano y los servicios ecosistémicos. Esto debería implicar el apoyo a estrategias que trascienden los enfoques de mercado y valoren la cooperación, la solidaridad, los bienes públicos y la protección de la naturaleza, incluyendo la resiliencia al cambio climático.
- Las inversiones en infraestructura deben garantizar que se escuchen las voces de las comunidades locales y originarias que puedan verse afectadas por las obras y que sus decisiones sean respetadas.
- En contraste con un sesgo convencional hacia los megaproyectos, las inversiones en infraestructura deberían priorizar la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados, en áreas como la atención de salud, el acceso al agua potable, el saneamiento, el transporte, la energía y las comunicaciones, y el acceso a Internet de alta velocidad. Estas preocupaciones pueden verse reflejadas en el reporte coescrito con ONU Mujeres sobre el financiamiento de la infraestructura de ciudades.²
- Las inversiones en infraestructura deben priorizar el apoyo a actividades productivas que contribuyan a la seguridad hídrica y alimentaria, la generación de ingresos y la creación de empleos decentes y bien remunerados en las comunidades locales, basándose en la gestión sostenible de la biodiversidad, la valorización de los conocimientos tradicionales, la innovación tecnológica y la garantía de relaciones de mercado justas.
- El apoyo a mejoras en la planificación previa de infraestructuras en sectores clave como el transporte y la energía, basado en instrumentos y procesos de toma de decisiones sólidos, transparentes y con participación ciudadana, es esencial para abordar los riesgos sociales, ambientales y económicos e identificar alternativas, desarrollando proyectos orientados a satisfacer las necesidades legítimas de las sociedades, evitando al mismo tiempo proyectos derrochadores y destructivos. Tanto en la planificación sectorial como a nivel de proyecto, la participación activa de la sociedad civil, con la debida atención a cuestiones como la igualdad de género, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y los mecanismos independientes de rendición de cuentas, es fundamental

² *Financiar la infraestructura de ciudades: una oportunidad para que los bancos públicos de desarrollo allanen el camino hacia la igualdad del mañana*, AIIB, Finance in Common, ONU Mujeres, febrero de 2025.

para promover una infraestructura verdaderamente sostenible e inclusiva desde el punto de vista social.

2. Infraestructura de transporte

El apoyo del BAI a la infraestructura de transporte en América Latina debe reflejar los principios y directrices expresados previamente en el punto 1, de manera que se garanticen análisis sólidos de los riesgos socioambientales y económicos, al tiempo que se fortalezcan las capacidades para identificar, desarrollar e implementar proyectos que maximicen los beneficios para las sociedades, evitando proyectos de alto riesgo y derrochadores.

En este sentido, nos preocupa especialmente el papel del BAI en el apoyo a las "Rutas de Integración Sudamericana", propuestas recientemente por el Ministerio de Planificación de Brasil. Con tres de las rutas ubicadas en la cuenca amazónica que es una región altamente sensible. La participación prevista del Banco en esta iniciativa se refleja en un Memorando de Entendimiento (MOU) firmado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en marzo de 2024, complementado posteriormente con una adenda firmada en noviembre de 2024.

En las últimas décadas, la planificación e implementación de corredores de infraestructura en regiones ambientalmente sensibles, como la Amazonía, se han caracterizado por impactos sociales y ambientales adversos, como la rápida deforestación, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, los conflictos por la tierra y la migración hacia periferias urbanas que carecen de infraestructura básica, por lo que no logran mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de la población de la región.

Es fundamental que la iniciativa "Rutas de Integración Sudamericana" no repita los errores que han caracterizado la planificación e implementación de corredores de transporte en la historia reciente. En este sentido, si el BAI quiere desempeñar un papel constructivo, debería asegurar:

- Análisis robustos de los riesgos socioambientales de los corredores de transporte, incluidos los impactos acumulativos y sinérgicos, abordando fenómenos como la especulación de tierras, el acaparamiento de tierras públicas, la deforestación, la tala ilegal, la minería y el narcotráfico, lo cuales tienen implicaciones para las poblaciones indígenas, rurales y otras comunidades tradicionales, mientras que también examinando alternativas y necesidades de acciones a priori para fortalecer la gobernanza territorial;
- Priorización de la infraestructura que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, incluyendo el apoyo a actividades productivas, basadas en la gestión sostenible de la biodiversidad, con participación activa de las organizaciones comunitarias;
- Articulación entre gobiernos y bancos públicos de desarrollo (ej. BAI, BNDES, BID, FONPLATA, CAF) para establecer principios y métodos comunes que promuevan estrategias de infraestructura sustentable, resiliente e inclusiva;

- Respeto al derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, cómo el convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales;
- Abstenerse de aprobar financiamiento directo e indirecto para patrocinar actividades nocivas para el ambiente o la sociedad en zonas de alta sensibilidad tales como áreas protegidas por la ley, bosques primarios, bosques secundarios vulnerables, con un gran valor cultural o en términos de biodiversidad, y otros de conservación comunitaria;³
- La articulación con iniciativas estratégicas para la protección de áreas ambientalmente sensibles, como los programas “Amazonía Siempre” del BID, y el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía en Brasil.
- Estas acciones previamente mencionadas deben darse en un marco de transparencia y acceso a la información, garantizando la libre disposición de los documentos y contratos, de fácil acceso y en los idiomas de alcance de personas potencialmente interesadas.

3. Transición energética justa

En América Latina y en todo el mundo, los planes de transición energética deben ser diseñados e implementados con transparencia y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los movimientos sociales), la comunidad científica y los saberes comunitarios locales y regionales. Ante la falta de una gobernanza sólida, existe una marcada tendencia a que las políticas, programas y proyectos energéticos —incluso aquellos implementados en nombre de “transiciones justas”— adopten enfoques verticales que favorecen los intereses de las élites económicas y políticas. Esto a menudo, provoca consecuencias sociales y ambientales desastrosas, incluyendo la violación de los derechos de las comunidades locales.

Creemos que el BAII puede desempeñar un papel positivo en el diseño e implementación de planes de transición energética justa, basándose en metodologías participativas y trabajando en colaboración con gobiernos, bancos públicos de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado. En este sentido, destacamos los siguientes elementos clave a tomar en cuenta en los planes de transición energética justa:

- Los planes de transición energética justa deben estar alineados con iniciativas más amplias para transformar patrones insostenibles de producción y consumo;
- La democratización del acceso a la energía y la generación descentralizada entre los grupos marginados en las zonas rurales y urbanas debe ser de máxima prioridad, junto con estrategias para mejorar la atención de salud, el suministro de agua, el saneamiento y las instalaciones educativas, así como la generación de ingresos y el empleo en actividades productivas sostenibles;
- Proyectos de energías renovables, en áreas como la energía eólica terrestre y marina, la energía solar fotovoltaica y el hidrógeno verde, deben basarse en normas ambientales y

³ Esta recomendación está alineada con los principios establecidos en la iniciativa *Banks and Biodiversity No-Go Policy*, la cual presenta una lista más amplia y detallada de sitios y actividades a evitar. Puede consultarse en: banksandbiodiversity.org.

sociales sólidas que garanticen la participación activa, y el respeto irrestricto de los derechos de las comunidades locales y la protección de la naturaleza;

- Un componente esencial de los planes nacionales de transición energética debería ser la eliminación gradual de los combustibles fósiles y su sustitución por fuentes renovables, en consonancia con la decisión adoptada en la COP 28;
- Los planes de transición energética deben incluir programas de conservación y eficiencia energética en los sectores industrial, comercial y residencial, en conjunto con acciones para promover la innovación tecnológica, la inclusión social y la competitividad económica;
- Establecer garantías sólidas para que la extracción de los minerales utilizados para la transición energética, como el litio y el cobalto, cumpla con los más altos estándares de protección ambiental y respeto a los territorios y derechos de las comunidades locales;
- Dentro de los planes de transición energética justa se deberían utilizar instrumentos económicos que proporcionen un marco de incentivos para las mejores prácticas, eliminando al mismo tiempo los incentivos perversos, como los subsidios para la expansión de la exploración de combustibles fósiles.

4. Transparencia y participación de la sociedad civil

4.1 Transparencia / Acceso a la información

Hemos experimentado varias dificultades para acceder oportunamente a información relevante sobre los proyectos respaldados por el Banco. El sitio web del BAI solo ofrece un resumen (de una a dos páginas) de los proyectos aprobados. Existe una falta de documentación de respaldo relacionada con la evaluación previa, las condiciones de los préstamos y el seguimiento y la evaluación de los proyectos, a diferencia de otros bancos multilaterales de desarrollo, donde publicar estas informaciones es cada vez más una práctica habitual.

También hemos enfrentado problemas en torno a la falta de transparencia de los prestatarios, especialmente en operaciones que involucran intermediarios financieros y la canalización de fondos mediante préstamos secundarios, una práctica común de financiamiento del BAI. En particular, hemos experimentado importantes dificultades para acceder a información básica de los prestatarios sobre los subproyectos financiados mediante représtamos (on-lending), como la ubicación, los beneficiarios, los tipos de operaciones y la aplicación de salvaguardias sociales y ambientales. El Banco debe tener una política clara que garantice la transparencia y el acceso a la información en estos casos, incluso en lo que respecta a los représtamos.

La Política de Información Pública vigente del BAI, con fecha del 5 de noviembre de 2024, permite un acceso público limitado a los detalles de los proyectos que involucran a Intermediarios Financieros (IF). Específicamente, establece que: «En el caso de un proyecto de IF que involucre un fondo de capital privado, el nombre, la ubicación y el sector de las empresas de la cartera del Cliente respaldadas por la financiación del Banco se divulgarán dentro de los 12 meses posteriores al cierre financiero». Además, esta versión de la Política ha sido eliminada del sitio

web y reemplazada por la versión anterior de 2018, eliminando incluso ese nivel mínimo de transparencia.

4.2 Participación de la sociedad civil

Se ha abierto un canal de diálogo incipiente entre las OSC latinoamericanas y el BAII con el Departamento de Comunicaciones del Banco. Si bien el Oficial de Sociedad Civil de dicho departamento ha trabajado diligentemente para atender nuestras inquietudes, creemos que es necesario crear una unidad de alto nivel en el Banco, que reporte directamente al Presidente, con la capacidad de facilitar la interacción de las OSC con el personal operativo que trabaja en áreas temáticas, políticas y proyectos específicos.

Acogeríamos con agrado un enfoque más coordinado de la participación de la sociedad civil en las reuniones anuales del BAII, con oportunidades de trabajar juntos en la planificación de la participación de la sociedad civil en la agenda oficial principal, incluyendo eventos dedicados a la sociedad civil, así como reuniones bilaterales con el personal del Banco y miembros de la Junta, que es una práctica común en otros bancos multilaterales de desarrollo. Además de garantizar espacios para un diálogo sustancial en las reuniones anuales, existe una necesidad evidente de abordar las dificultades logísticas, especialmente las relacionadas con el apoyo para visas de viaje y acreditación.

Acogemos con satisfacción la revisión del Mecanismo de Atención a las Personas Afectadas por Proyectos (PPM) como mecanismo independiente de rendición de cuentas. En agosto de 2024 se celebró una fructífera reunión en Brasilia; sin embargo, nos decepcionó que el Banco no realizará consultas presenciales en otros países latinoamericanos, las cuales agradeceríamos se reanudarán durante la segunda ronda de consultas. Esperamos la opinión del equipo de revisión del PPM sobre cómo se han considerado e incorporado las sugerencias que presentamos en el borrador de las nuevas directrices. Destacamos la importancia vital de un canal independiente para que las comunidades afectadas por proyectos individuales puedan presentar quejas y recibir reparación del BAII, de cofinanciadores, de desarrolladores de proyectos y otras partes responsables.

Al organizar futuros diálogos sobre la participación de la sociedad civil, proponemos incluir en la agenda: 1) como se indicó anteriormente, la necesidad de directrices y mecanismos claros para asegurar que el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales se incorpore efectivamente en las iniciativas apoyadas por el Banco, incluyendo garantías para los derechos y salvaguardas específicas para los pueblos indígenas en contacto reciente y aislamiento voluntario, 2) la aplicación del Acuerdo de Escazú, relativo al acceso a la información, participación y acceso a la justicia con respecto a cuestiones ambientales (basado en el Principio 10 de la Declaración de Río y adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe en 2018) a las iniciativas apoyadas por el BAII en la región.

Señor Presidente, esperamos con gran interés nuevos debates sobre las cuestiones y propuestas en esta carta en las próximas reuniones anuales en Beijing y en adelante. Consideramos que tales discusiones son de gran relevancia en su legado en el BAII, asegurando un progreso continuo desde el liderazgo entrante respecto al papel del Banco en el apoyo del desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo en América Latina.

Muchas gracias por su atención,

Cordialmente,

- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),
Regional - America Latina y el Caribe
- Brics Policy Center, Brasil
- Cohesión Comunitaria e Innovación Social, México
- Conectas Direitos Humanos, Brasil
- CooperAcción, Perú
- Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), Ecuador
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina
- Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, Argentina
- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Argentina
- Grupo de Trabajo sobre el BID, Regional
- GT Infraestructura e Justiça Socioambiental, Brasil
- Instituto Maíra, Brasil
- Latinoamérica Sustentable (LAS), Regional
- Protección Internacional Mesoamérica, Regional
- Sustentarse, Chile
- Tierra viva, Honduras

Con respaldo de:

- Accountability Council
- Bank Information Center
- Recourse
- Urgewald
- Growthwatch

